



Cámara Federal de Casación Penal

Registro nro. 1140/25

USO OFICIAL

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de dos mil veinticinco, se reúne la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los señores jueces doctores Carlos A. Mahiques -presidente-, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky -vocales-, asistidos por la secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa nro. **CPE 672/2013/TO1/4/CFC2**, caratulada: **Galván, César Javier s/ recurso de casación**.

Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Javier Augusto De Luca, a la parte querellante ARCA (ex AFIP) el doctor Leonardo Martín Adolfo Torres y a César Javier Galván su defensor particular, doctor Andrés María Gutiérrez.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctores Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor **Carlos A. Mahiques** dijo:

I. El Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 1, en integración unipersonal, el 7 de marzo del corriente año, declaró la extinción de la acción penal seguida contra César Javier Galván por la presunta omisión de depósito en el plazo legal de los importes que se habrían retenido a los empleados de Venger SA, en concepto de aportes al Régimen de la Seguridad Social, correspondientes a los períodos 12/2011 y



6/2012 (cfr. art. 9 de la ley nro. 24.769, con las modificaciones incorporadas por la ley nro. 26.735) y sobreseyó al nombrado.

Contra esa decisión, el representante de la querella ARCA (ex AFIP) interpuso recurso de casación, que fue concedido oportunamente por el *a quo* y mantenido ante esta sede.

II. La recurrente fundó sus agravios en el primer inciso del art. 456 del CPPN y en el art. 457 del mismo cuerpo legal. Ello, por cuanto consideró que el tribunal de mérito interpretó incorrectamente la ley sustantiva y, además, porque la decisión impugnada reviste el carácter de sentencia definitiva.

Expuso que César Javier Galván resulta excluido de los beneficios penales instaurados por la ley nro. 27.743 al tratarse de un agente de retención que, en este caso, retenía los aportes de sus empleados y estaba obligado a depositarlos (cfr. art. 4, inc. m de esa norma). En ese sentido, explicó que Galván ostentaba el carácter de empleador al haber ingresado los formularios de declaraciones juradas de Seguridad Social (F931) de sus empleados y es por ello que, como tal, también es agente de retención.

Resaltó que es deber del empleador actuar como agente de retención en virtud de lo normado por los arts. 11 y 12, inc. c, de la ley nro. 24.241. Aclaró, a su vez, que la distinción efectuada por el Régimen Penal Tributario entre ambos conceptos se debe a que los empleadores sólo retienen aportes mientras que los agentes de retención también pueden retener contribuciones.

Indicó que únicamente pueden resultar autores de la figura penal imputada los agentes de retención y que,

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

habiéndose procesado a Galván en estas actuaciones por aquel delito, resultaría contradictorio considerar ahora que no reviste tal carácter.

Por lo expuesto, solicitó se revoque el resolutorio recurrido.

Hizo la reserva del caso federal.

III. Se dejó debida constancia de haberse cumplido con la audiencia en los términos del art. 465 bis del CPPN, en función de los arts. 454 y 455 del mismo texto legal. En esa oportunidad, la parte querellante y la defensa de César Javier Galván efectuaron presentaciones.

El apoderado del ARCA -ex AFIP- reiteró los agravios expuestos en el escrito recursivo y requirió, nuevamente, se revoque la resolución atacada. De su lado, la defensa criticó los argumentos de la querella en virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la ley nro. 27.743 y solicitó se confirme la decisión del a quo.

IV. El recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que la recurrente invocó la errónea aplicación de la ley sustantiva. Además, el pronunciamiento cuestionado es de los contemplados en el art. 457 del CPPN.

V. Un mejor orden discursivo impone precisar los principales actos procesales cumplidos en el *sub examine*, a fin de circunscribir la cuestión traída a revisión por el acusador a esta sede.

Conforme surge de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el Ministerio Público y la querella ARCA (ex AFIP) obrantes en las actuaciones principales, se le

USO OFICIAL



imputó a César Javier Galván haber omitido depositar, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencidos los respectivos plazos de ingreso, los importes retenidos a los empleados de Venger SA, en concepto de aportes al Régimen de la Seguridad Social, correspondientes a los períodos 12/2011 y 6/2012 por las sumas de \$111.684,59 y \$118.286,29, respectivamente. Se calificó provisoriamente a esos hechos con el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, previsto en el art. 9 de la ley nro. 24.769 -reformada por la ley nro. 26.735-.

La defensa solicitó se extinga la acción penal seguida contra su defendido en función de lo dispuesto por el art. 5 de la ley nro. 27.743 y requirió su sobreseimiento. Ello, en tanto la deuda reclamada fue totalmente cancelada con anterioridad a la entrada en vigencia de la precitada normativa y, al no existir sentencia condenatoria firme en autos, la extinción requerida debía operar de pleno derecho.

La representante de la vindicta pública ante esa instancia prestó conformidad para que se haga lugar al pedido de la defensa. Mientras que el abogado de la parte querellante se opuso a aquel planteo en virtud de la exclusión prevista en el art. 4, inc. m, de la ley nro. 27.743 ya que Galván se encuentra con procesamiento firme y requerido a juicio oral.

Finalmente, el *a quo* dispuso la extinción de la acción penal en los términos del art. 5, tercer párrafo, de la citada normativa y sobreseyó al imputado en la presente causa. Esto fue recurrido únicamente por la querella ARCA (ex AFIP).

VI. El tribunal de previa intervención recordó los diferentes planteos y resoluciones suscitados a lo largo de





Cámara Federal de Casación Penal

este proceso, el pedido de la defensa referido a la extinción de la acción penal en los términos de la ley nro. 27.743 y las posturas de las partes acusadoras al respecto.

En concreto, remarcó que el imputado canceló las obligaciones tributarias aquí reclamadas como responsable solidario de la firma Venger SA con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley nro. 27.743, lo que fue informado por el Fisco en estos actuados. Por ello, consideró que resultaban aplicables los beneficios allí prescriptos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de esa norma.

De adverso a lo postulado por la querella, al analizar la causal de exclusión prevista en el art. 4, inc. m, de la ley nro. 27.743, el tribunal de mérito explicó que el Régimen Penal Tributario, a partir de la modificación introducida por la ley nro. 26.063, efectuó una expresa diferenciación respecto de los sujetos activos en el tipo penal de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social (por un lado, los agentes de retención y, por el otro, los empleadores).

Con apoyo en lo esgrimido por el acusador público, indicó que esa exclusión resultaba aplicable solo para el caso de los agentes de retención o percepción que no sean empleadores. Por lo que, incluirlos en aquella previsión, implicaría ampliar el espectro de los supuestos contemplados, en violación del principio de legalidad.

En definitiva, y toda vez que Venger SA revestía el carácter de empleador de sus dependientes, concluyó que Galván -como tercero solidario- no se encontraba alcanzado por la mentada exclusión. Añadió, en sintonía con lo anterior, que el art. 12 de la ley y 33 de la RG 5525/2024

USO OFICIAL



prevé que los responsables solidarios pueden adherir al régimen de regularización por obligaciones del deudor principal -aún cuando medie contra ellos una causal de exclusión- y que el imputado Galván tampoco se encontraba declarado en quiebra.

VII. Sentado lo anterior, cabe recordar que el 27 de junio de 2024 se sancionó la ley nro. 27.743 por la que se estableció un nuevo régimen de regularización de deudas previsionales con impacto en causas penales. Esta última también forma parte del conjunto de normas que generalmente emplea el Estado como herramienta de diferentes programas de política económica con efectos en el ámbito penal. A lo largo de los años, varias son las leyes que han facultado a los posibles infractores de normas penales económicas a neutralizar la persecución de ciertos delitos, a partir de la regularización de las deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social. Esto es lo que sucedió con leyes como la nro. 25.401 del año 2000, nro. 26.476 del año 2008, nro. 26.860 del año 2013, nro. 27.260 del año 2016, nro. 27.541 del año 2019, y sus modificatorias nro. 27.562 del año 2020 y la nro. 27.653 del año 2021, por las que se establecieron sistemas de regularización con análogas consecuencias y beneficios en el ámbito penal.

Sin perjuicio de la opinión que pueda merecer esta forma de legislar y de los efectos que genera con relación a los fines de la pena y la función político criminal del Estado de tutelar los bienes jurídicos relevantes, lo cierto es que tal metodología legislativa resulta recurrente en el ámbito penal económico, donde los objetivos del sistema penal se entreveran -a veces conflictivamente- con los intereses macroeconómicos de la política estatal.

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

En la exposición de motivos de la ley nro. 27.743, se explicó que el régimen de regularización examinado tenía como objetivo paliar la delicada situación económica y financiera de las empresas argentinas y de los contribuyentes individuales, de extrema fragilidad dada la coyuntura actual. Se consideró que el régimen propuesto tenía por fin abordar en forma directa el complejo escenario mencionado, ofreciendo opciones para reincorporar a la economía formal a los contribuyentes que opten por su adhesión y aliviando la situación financiera del país al efectivizar el cobro inmediato de impuestos adeudados u omitidos.

En ese contexto, la ley nro. 27.743, en su título I, instauró un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, similar al sancionado por la ley nro. 27.541 en 2019 (y sus modificatorias nros. 27.652 y 27.653), al que pueden acogerse, según lo dispuesto en el artículo 2 de dicha norma, "(l)os contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos...".

Conforme a lo previsto en el artículo antes citado, el mencionado acogimiento podía formularse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, desde la fecha de entrada en vigencia del decreto que dispuso su reglamentación (nro. 608/2024, B.O. 12 de julio de 2024) y hasta los 150 días corridos posteriores. Además, su procedencia se sujetó a la verificación de requisitos objetivos y subjetivos (cfr. arts. 3, 4 y 5) y se



establecieron beneficios tanto administrativos como penales (arts. 5, 6, 7 y 8). Con relación a estos últimos supuestos, el artículo 5 de la ley edictó, en lo que aquí interesa, que "(e)l acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales (...) de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal (...) La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen. **También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha** (...) En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados".

Ante las dificultades interpretativas que generan las diversas leyes recaudatorias con consecuencias penales cuya aplicación podría repercutir en el caso, debe procurarse una solución que integre armónicamente las normas sin desnaturalizar las unas o las otras. Con ese propósito, una adecuada hermenéutica en este especial ámbito normativo

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

requiere tener en consideración los particulares propósitos que lo informan y su compatibilidad con los objetivos propios del derecho penal.

Conforme surge de lo expuesto, de una interpretación literal de lo normado por el art. 5 de la ley nro. 27.743, se colige que ante la comprobación de que las obligaciones relativas a los aportes con destino a la seguridad social fueron canceladas en su totalidad con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella norma y siempre y cuando no exista sentencia firme a esa fecha, debería declararse la extinción de la acción penal. Es decir, el único requisito de procedencia para que se pueda extinguir la acción penal frente a la situación regulada por la norma referida es la falta de verificación de una sentencia firme (cfr. criterio expuesto en causa CPE 519/2019/TO2/1/CFC3, Vázquez, Ángel y otro s/ recurso de casación, reg. nro. 935/25 de esta Sala, rta. el 9 de septiembre de 2025; y causa 957/2016/52/CFC11, DH COM SA y otros s/ recurso de casación, reg. nro. 1035/25 de la Sala I de esta Cámara, rta. el 23 de septiembre de 2025).

En efecto, en el *sub examine* se comprobó la situación regulada por el tercer párrafo del art. 5 de la mencionada ley nro. 27.743, pues, con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia (8 de julio de 2024), se produjo la cancelación total de la obligación relativa a los aportes con destino a la seguridad social (cfr. lo informado por la querellante el 5 de abril de 2024 en los autos principales), sin que se haya verificado la existencia de una sentencia firme.

USO OFICIAL



Por lo tanto, independientemente de la opinión que me pueda merecer el criterio aplicado por el *a quo* de distinguir los conceptos de empleador y agente de retención y del que se agravia la recurrente, por las razones expuestas, la extinción de la acción penal dispuesta debe confirmarse.

En tal sentido, las causales de exclusión que valoró el tribunal de mérito para resolver de la forma en que lo hizo y que invocó la querella para recurrir ante esta instancia, deben analizarse frente a un acogimiento al régimen de regularización instaurado por dicha normativa o una cancelación total en las condiciones previstas en ese régimen (supuestos del art. 5, primer y segundo párrafo), cuestión que no ocurrió en estos autos.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de la parte querellante, con costas en la instancia (arts. 471, 530 y ccds. del CPPN).

Tal es mi voto.

El señor **juez doctor Juan Carlos Gemignani** dijo:

a) Cabe tener en cuenta que, conforme surge de la compulsa de las actuaciones obrantes en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100 -y también fue precisado en el sufragio precedente-, en las presentes actuaciones se imputa a César Javier Galván haber omitido depositar, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencidos los respectivos plazos de ingreso, los importes retenidos a los empleados de la compañía "VENGER S.A.", en concepto de aportes al Régimen de la Seguridad Social, correspondientes a los períodos fiscales 12/2011 y 6/2012 por los montos de \$ 111.684,59 y \$ 118.286,29, respectivamente.

b) En lo concerniente al trámite de la causa, he de remitirme a la pormenorizada reseña efectuada en la primera





Cámara Federal de Casación Penal

ponencia, mientras que sí he de dejar sentado *infra* la extensa argumentación expuesta por la judicatura de la instancia anterior para adoptar el temperamento decidido.

En ese sentido, se consideró que: "16) *Establecido ello, corresponde señalar en primer lugar que la ley 27.74311 -tal como lo dispone su art. 1- estableció el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social. Conforme se desprende de la mencionada normativa, dicho Régimen -excepcional- se creó con el fin de lograr el pago voluntario de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras (art. 1), a efectos de que se acojan contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de marzo de 2024, inclusive (art. 2 de la ley); ello, a fin de obtener distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren -entre los cuales se encuentra la extinción de la acción penal en el caso de la cancelación total de la deuda que se trate-. 17) Cabe destacar que, a partir de lo dispuesto en el art. 3 de la referida ley 27.743, se determinó que las obligaciones incluidas en el mencionado Régimen son las siguientes: "... a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El*

USO OFICIAL



allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen; b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescrito las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables; c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco de la ley 27.605; d) Aquellas obligaciones de los agentes de retención y percepción que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo; e) Las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha; f) Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley; g) Las multas por infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto la infracción de contrabando menor” (lo resaltado pertenece a la presente).

18) Además, en el mencionado Régimen -precisamente en su art. 4-, se enumeran los supuestos que quedan excluidos del alcance de dicha normativa, a saber: '... a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales; b) Las deudas por cuotas destinadas a las

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART); c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares; d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS); e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio; f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE); g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones; h) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes; i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración; j) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; l) Las personas jurídicas en las que,

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNÁN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055

según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; **m) Los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones...**' .

19) Ahora bien, en particular y en lo que aquí respecta, el art. 5 del mencionado Régimen establece que 'El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.' 'La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen.' **'También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha.** Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen...'. '... En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados...' (lo resaltado pertenece a la presente).

20) Que, en ese contexto, en la medida en que las obligaciones tributarias derivadas del objeto de imputación en la presente causa (enunciadas en el considerando 1 de la presente) vencieron con anterioridad al 31/03/2024, fueron canceladas por el responsable solidario de la firma VENGGER S.A. en el marco de las condiciones previstas por la ley 27.743 y que no se advierte ninguna de las causales excluyentes prescriptas por la referida norma (ver lo prescripto en el art. 4° del régimen), resultan aplicables los beneficios establecidos en aquella norma, tal como se verá seguidamente.

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNÁNDEZ BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055

Sobre el particular, la Querella informó, previa consulta a la Agencia N° 50 de la ARCA, '... que los períodos consultados Diciembre 2011 y Junio 2012 se encuentran cancelados, tanto el capital como los intereses resarcitorios...', adjuntando pantalla de pagos DDIT y Pantalla de Sistemas de Cuentas Tributarias, donde se visualiza la cuenta del contribuyente con los períodos abonados, con fecha 13 de marzo de 2024B. La circunstancia precedentemente señalada, configura el supuesto contemplado por el art. 5 de la referida ley; en tanto y en cuanto, 'La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación [...] También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha'. C. A su vez, cabe recordar que en oportunidad de otorgarle intervención en el marco de este incidente, la Querella solicitó el rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal a través de la alternativa regulada en la ley 27.743, en base a la única objeción que desarrollara, en el entendimiento de que el imputado CÉSAR JAVIER GALVÁN se encuentra comprendido dentro de las exclusiones previstas por el inciso m) del art. 4 de dicha norma. Sobre este criterio, es necesario señalar en primer término, que de esta última norma, se advierte una remisión a lo previsto en los artículos 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, 6° y 9° de la ley 24.769 y sus reformas, y 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones.

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

Ahora bien, sin perjuicio de que, como sujetos alcanzados por dicho inciso se indican específicamente a los 'agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral', el legislador completó dicha exclusión con las conductas que aquellos deberían haber llevado a cabo para que aquélla opere; y, esas conductas, son las tipificadas por los artículos referidos en el párrafo que antecede.

Todo ello exige analizar los tipos penales en trato, para identificar cuál es, en definitiva, el supuesto que excluye el inc. m) del art. 4 de los beneficios otorgados por el propio Régimen.

En consecuencia, corresponde recordar que, en primer lugar, el art. 8 de la ley 23.771 reprimía '... con prisión de dos a seis años, el agente de retención o de percepción que no depositare o mantuviere en su poder, total o parcialmente el tributo percibido o retenido, o los aportes y contribuciones, retenidos, a los organismos nacionales de seguridad social conforme con lo previsto en el artículo 3 después de vencidos los plazos en que debió ingresarlos...' (lo subrayado pertenece a la presente). Por otro lado, la ley 24.769 en su art. 6, imponía igual consecuencia jurídica a las conductas llevadas a cabo por 'el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires' (lo subrayado pertenece a la presente) consistentes en no depositar, total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos (\$40.000) por cada mes.



A su vez, el art. 9 del mismo cuerpo normativo prevé que 'será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos (\$20.000) por cada mes.

Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos (\$20.000) por cada mes.'.

Por su parte, y en el mismo sentido, el Régimen Penal Tributario consagrado en el título IX de la ley 27.430, establece en su art. 4 que 'será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado, superare la suma de cien mil pesos (\$ 100.000) por cada mes.'.

Asimismo, el art. 7 del mencionado Régimen dispone que 'Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social,

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

siempre que el monto no ingresado superase la suma de cien mil pesos (\$ 100.000), por cada mes. Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cien mil pesos (\$ 100.000), por cada mes.'.

En consecuencia, de los tipos penales descriptos, se advierte una expresa diferenciación en los destinatarios de dichas normas. Sin perjuicio de que la conducta típica sea, en todos los casos, la de no depositar -en el respectivo plazo legal- el monto retenido al trabajador en concepto de cargas sociales, lo cierto es que, específicamente, se previeron dos supuestos distintos en las mismas disposiciones legales con la única finalidad de diferenciar los casos en los que el sujeto activo sea 'agente de retención o percepción' de los recursos de la seguridad social, o bien cuando sea el 'empleador'.

Aquello, demuestra que el legislador tuvo la voluntad expresa de distinguir un sujeto activo del otro en el mismo tipo penal. Pues bien, debe recordarse que en la redacción original de la ley 24.769, esta diferenciación no se encontraba consagrada, en la medida que solo aludía -como destinatario de la disposición legal- al 'agente de retención de aportes del sistema de seguridad social nacional'. Sin embargo, a partir de la reforma de la ley 26.063, expresamente se incorporó la mencionada distinción entre los 'empleadores' y los 'agentes de retención y percepción de los recursos de la seguridad social' 16, que incluso fue



mantenida luego por la ley 26.735 y en el Régimen Penal Tributario consagrado en la 27.430; por lo que esa distinción legal no puede ignorarse[...].

D. Consecuentemente y en orden a lo expuesto en los puntos que anteceden, se advierte que el imputado César Javier GALVÁN no se encuentra alcanzado por la exclusión dispuesta en el inc. 'm' del ar. 4 de la ley 27.743; toda vez que, VENGHER S.A. reviste el carácter de 'empleador' de los dependientes de aquella firma; mientras que el nombrado GALVÁN resultan ser tercero solidario de las obligaciones de la seguridad social de la mencionada sociedad.

Por otro lado, corresponde destacar que el propio art. 2 de la ley 27.743 establece que '**los contribuyentes y responsables de las obligaciones** tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social... **podrán acogerse** por las obligaciones vencidas...'; mientras que el art. 12 de esa misma norma prevé que '**Los responsables solidarios** mencionados en el artículo 8° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones fiscales, aduaneras o de la seguridad social correspondientes al deudor principal, en tal carácter de responsables solidarios, **podrán adherir al presente régimen**. En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá la obligación de presentar declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularicen cuando ellas no hubieran sidopresentadas por el deudor principal o la obligación de presentar las declaraciones juradas rectificativas' (los destacados son del presente).

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

Además, el art. 33 de la Resolución General 5525/2024 -reglamentaria de la referida ley- habilita a adherir al régimen a los responsables solidarios, aun cuando el deudor principal se encuentre excluido por alguna de las causales previstas en el art. 4 de la ley 27.743, en tanto dispone que '**... los responsables solidarios, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones impositivas, aduaneras o de los recursos de la seguridad social correspondiente al deudor principal, aun cuando este último se encuentre excluido por alguna de las causales previstas en el artículo 4° de la Ley N° 27.743, podrán, en tal carácter, adherir al presente régimen de regularización. En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudieran realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá, respecto del presentante, la obligación establecida en el inciso a) del artículo 4° de esta resolución general...**' (el destacado es del presente).

E. Por otro lado, cabe agregar que por el inciso i) del art. 4 de la ley 27.743, se estableció una exclusión subjetiva en relación a los 'declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración'. A este respecto, no debe obviarse que el Depto. de Concursos y Quiebras de la ARCA informó que en el proceso caratulado 'VENGER S.A. S/QUIEBRA', con fecha 25/04/2022, fue declarada la clausura de los procedimientos por falta de activo.



Ahora bien, también en lo relativo a dicha circunstancia, cabe acudir a lo dispuesto en el art. 33 de la mencionada Resolución General 5525/2024 (reglamentaria de la ley 27.743), que fuera citada mas arriba, que habilita a adherir al régimen en cuestión a los responsables solidarios, aun cuando el deudor principal se encuentre excluido por alguna de las causales previstas en el art. 4 de la ley 27.743, entre las que se encuentra la situación de los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, en los términos previstos en el inciso i) del mencionado art. 4.

En efecto, también a este respecto, y en coincidencia con lo establecido por la representante del Ministerio Público Fiscal, debe postularse una interpretación literal de la norma reglamentaria aplicable, por cuanto la situación falencial que ha informado la ARCA en relación a **VENGER S.A.** -mas allá del estado actual en que se encontraren los autos que se sustanciaron en sede comercial- no obsta a César Javier GALVÁN a los fines de su acogimiento al régimen regulado por la ley 27.743, quien no se encuentra declarado en quiebra, y efectuó el pago respectivo en el marco de este incidente en carácter de responsable solidario de aquella firma; erogación que no puede generar perjuicio alguno al patrimonio de la fallida[...].

F. Por último, cabe concluir que el imputado César Javier Galván, tampoco se encuentra alcanzado por ninguna de las restantes causales de exclusión previstas en los incisos 'j', 'k' y 'l' del artículo 4 de la referida ley 27.743; en la medida que de los informes remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia surge que el nombrado Galván carece de antecedentes computables.

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

21) Que, en ese contexto, en la medida en que las obligaciones tributarias derivadas del objeto de imputación en la presente causa [enunciadas en el apartado I.1) de la presente] vencieron con anterioridad al 31/03/2024, fueron canceladas por el '**responsable solidario**' de la firma VENGER S.A. en forma previa a la entrada en vigencia de la ley 27.743 (tal como lo contempla el art. 5°, tercer párrafo, de dicha ley); y que no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales excluyentes prescriptas por la referida norma en relación al imputado César Javier GALVÁN (ver lo mencionado en el considerando 19° -ítems C al F inclusive- y lo prescripto en el art. 4° del régimen), resultan aplicables los beneficios establecidos en aquella norma.

22) Que, en consecuencia, el suscripto considera que corresponde declarar la extinción de la acción penal seguida a César Javier GALVÁN con orden a los hechos aludidos en la consideración I.1), y -en consecuencia- sobreseer al nombrado en orden a tales sucesos (arts. 336 -inc. 1°- y 361 del C.P.P.N. y art. 5, tercer párrafo, de la ley 27.743). ' (el resaltado pertenece al original)."

c) Sentado ello, he de señalar que en una causa cuyas cuestiones debatidas resultaban análogas a la presente, adherí al análisis efectuado y a la solución propuesta por el juez Borinsky. Por entonces, dicho colega refirió que "[...]contrariamente a lo postulado por la parte recurrente, la resolución traída a estudio cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes (CSJN, Fallos 302:284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la vez que está exenta de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica y resulta una derivación razonada del



derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias del caso.

En efecto, la querellante se limita a expresar su mera disconformidad con lo resuelto, mas no alcanza a evidenciar -ni se advierte- la errónea aplicación de la ley sustantiva que invoca, en tanto no ha brindado en su presentación recursiva argumentos suficientes ni novedosos para controvertir la fundada argumentación que presenta el fallo impugnado y, de esa manera, conmover lo resuelto por el a quo.

Es dable señalar que la ley 27.743 establece un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social.

Del análisis de su texto se desprende que dicho régimen, de carácter excepcional, fue creado para fomentar el cumplimiento voluntario de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social. Conforme el artículo 2°, pueden adherir al mismo los contribuyentes y responsables con obligaciones vencidas o infracciones cometidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive. Los beneficios reconocidos dependen de la forma de adhesión y del tipo de deuda involucrada, destacándose entre ellos la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la cancelación total de lo adeudado.

En ese contexto, y de acuerdo con lo manifestado por el representante del Ministerio Público Fiscal en la instancia anterior -y sostenido por el a quo-, las obligaciones tributarias que constituyen el objeto procesal de estas actuaciones fueron canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia del Régimen de Regularización establecido por la Ley 27.743, circunstancia que las ubica dentro del supuesto contemplado en el artículo 5 de dicha normativa.

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

Por otro lado, la interpretación sostenida por la parte recurrente, en cuanto postula que corresponde denegar los beneficios previstos en la Ley 27.743 con fundamento en lo dispuesto por el art. 4 inc. m), carece -en las singulares circunstancias del presente caso- de sustento en la ley sustantiva aplicable (cfr. en lo pertinente y aplicable la causa Nro. CPE 575/2009/TO1/CFC5, "Matisic, Ricardo s/ recurso de casación" -Reg. Nro. 1110/2025, del 16/10/2025-, del registro interno de esta Sala III de la C.F.C.P.).

A partir de ello, no puedo sino colegir que la parte querellante se limitó a reeditar de modo genérico su criterio contrario al del a quo, sin desarrollar un análisis crítico de la fundamentación exteriorizada por el órgano sentenciante de la instancia anterior para arribar a la solución liberatoria dictada a la luz de lo previsto en la ley 27.743.

d) En consecuencia, adhiero a la propuesta del magistrado preopinante de RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante (ARCA-ex A.F.I.P.-), CON COSTAS en la instancia (arts. 530 y 531, del CPPN).

Tener presente la reserva del caso federal.

El señor juez doctor **Mariano Hernán Borinsky** dijo:

Atento a las particulares circunstancias del caso reseñadas por los distinguidos colegas, y considerando que el objeto de la presente causa se circunscribe únicamente a dos períodos fiscales -correspondientes a 12/2011 y 6/2012 por las sumas de \$ 111.684,59 y \$ 118.286,29, respectivamente-, y que lo adeudado fue íntegramente cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la



ley 27.743, corresponde homologar la resolución traída a estudio.

La parte recurrente sustenta su crítica alegando que Galván en los hechos actuaba como agente de retención, por lo que quedaría excluido de los beneficios extintivos de la ley 27.743 en virtud del artículo 4 inciso m) de la referida normativa.

No obstante la reiteración de su visión sobre el particular, el órgano acusador no rebate los argumentos en virtud de los cuales el Tribunal Oral rechazó la mencionada postura. Motivo que sella negativamente la suerte del agravio analizado.

De un análisis integral del caso se advierte que el temperamento adoptado por el a quo se encuentra debidamente motivado y constituye una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las concretas circunstancias del caso (art. 123 C.P.P.N.).

En efecto, la querella reitera someramente su posición pero no efectúa un examen crítico de la fundamentación expuesta por el Tribunal Oral para sustentar la solución desincriminante en los términos previstos en la ley 27.743.

Corresponde señalar que la ley 27.743, en su art. 5, establece: *"...quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha..."*.

Así, el representante del Ministerio Público Fiscal ante la anterior instancia, sostuvo: *"habiéndose verificado que se han cancelado las obligaciones emergentes de los*

Fecha de firma: 23/10/2025

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: LUCIA DEL PILAR RAPOSEIRAS, SECRETARIA DE CAMARA



#39158305#477058366#20251022130948055



Cámara Federal de Casación Penal

USO OFICIAL

hechos de marras con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del régimen de la ley 27.743, no verificándose respecto del imputado ninguna de las exclusiones previstas por la ley 27743, entiendo que corresponde hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal efectuado por la defensa de Cesar Javier GALVAN, en función de lo dispuesto por el art. 5 de dicho cuerpo legal y declarar extinguida la acción penal emergente de autos, dictando el sobreseimiento del nombrado en función de los arts. 336 inc. 1 y 361 del CPPN.”.

Por otra parte, no resulta atendible la objeción introducida por la recurrente en relación con la exclusión prevista en el art. 4 inc. m) de la misma ley.

Dicha disposición excluye únicamente a los agentes de retención y percepción que, con auto de procesamiento firme y causa elevada a juicio oral, resulten imputados por los delitos tipificados en el art. 8 de la ley 23.771, en los arts. 6 y 9 de la ley 24.769 o en los arts. 4 y 7 del título IX de la ley 27.430.

De la lectura armónica de esos tipos penales se advierte que el legislador distinguió expresamente entre dos posibles sujetos activos: los “empleadores” y los “agentes de retención o percepción”. Esta diferenciación, incorporada a partir de la reforma introducida por la ley 26.063 y mantenida en la ley 27.430, impide equiparar ambas categorías.

En consecuencia, la exclusión contenida en el inciso m) no alcanza a los empleadores, ni tampoco a los responsables solidarios de las obligaciones de la seguridad



social, como es el caso del imputado, sino únicamente a los agentes de retención o percepción en sentido estricto.

Extender la prohibición más allá de lo expresamente previsto importaría una interpretación expansiva en perjuicio del justiciable, en franca violación del principio de legalidad y de taxatividad en materia penal.

Cabe agregar que el propio art. 12 de la ley 27.743, así como el art. 33 de la Resolución General 5525/2024 dictada por la entonces AFIP -actual ARCA-, habilitan expresamente a los responsables solidarios a adherir al régimen, aun cuando el deudor principal se encuentre excluido. Ello ratifica que la situación del imputado no se encuentra comprendida en la restricción del art. 4 inc. m).

En este orden de ideas, es menester destacar que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan (Fallos: 329:2876 y 330:4454, entre otros), regla que impone no solo armonizar sus preceptos sino también conectarlos con las demás normas que integran el orden jurídico, del modo que mejor concuerden con su objetivo y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 258:75; 329:2890; 330:4713 y 4936).

Por último, resulta dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -al hacer suyos los fundamentos del Procurador General- sostuvo que, si bien la aceptación de una solicitud de acogimiento a un régimen de regularización impositiva constituye una facultad propia de las autoridades fiscales y no admite, en principio, revisión judicial, ello no impide que los tribunales ejerzan un control de legalidad y razonabilidad respecto de la





Cámara Federal de Casación Penal

interpretación y aplicación de sus disposiciones en el caso concreto, especialmente cuando dicha decisión pueda tener efectos sobre la vigencia de la acción penal (Fallos: 338:386).

En consecuencia, adhiero a la propuesta de **RECHAZAR** el recurso de casación interpuesto por la parte querellante. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 *in fine* del CPPN).

Tener presente la reserva del caso federal.

En mérito a la votación que antecede, el tribunal

RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, por mayoría, con costas en la instancia (arts. 471, 530 y ccds. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

USO OFICIAL

